

Cataluña es la comunidad autónoma con más personas dependientes en lista de espera, según el último balance del Sistema de Atención a la Dependencia, que revela que casi cuatro de cada diez dependientes (37,1%) no recibe la prestación o servicio a la que tienen derecho por ley tras ser evaluados, un dato que supera en 12,6 puntos porcentuales la media española (24,5%).

Los datos a 31 de diciembre de 2017 señalan que de las 224.261 personas reconocidas como dependientes en Cataluña, 83.203 están desatendidas. Al actual ritmo, esta comunidad autónoma precisaría de más de once años para acabar con el «limbo» en el que se encuentran estos dependientes, según la estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Las voces críticas, más o menos rotundas, han sido recurrentes en los últimos años por las demoras. «Creé el grupo Penedes de la Llei de la Dependència para denunciar los problemas que estábamos teniendo con el cobro de las ayudas para mis abuelos. Tardaban mucho en hacer las revisiones y el dinero también se demoraba. Buena parte tenía que avanzarla tú», explica el impulsor de esta plataforma, Jordi Darder.

Algunos denuncian ausencia de voluntad política y otros falta de liquidez. Así se expresa Cinta Pascual, presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA): «Es falta de voluntad política, y la crisis ha sido una excusa. Cuando nació la ley, ya se vio que iba acompañada de una memoria económica tan floja que no se sostenía. En otros países se hace a través de un impuesto o de aseguradoras. Aquí se confió en los buenos tiempos, en la burbuja, y cuando vino la crisis todo se vino abajo. En estos años ningún partido se ha atrevido a tocar la ley pero todos la han recortado».

Las cifras, pese a todo, han mejorado. En 2016 murieron en Ca-

Las quejas «Las valoraciones son muy a la baja»

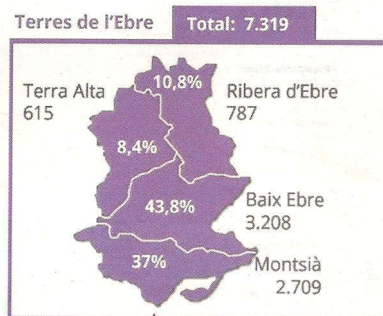
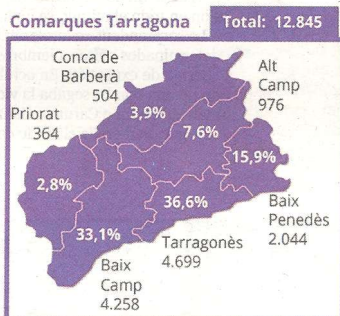
José, un vecino de Torreforta de más de 90 años, acaba de ser reconocido con un grado I de dependencia, el más bajo. Ese nivel se aprueba en aquellas personas que necesitan ayuda al menos una vez al día en cuanto a actividades básicas o tiene necesidades de ayuda intermitente. José no puede hacer nada solo: ni comer, ni cocinar, ni siquiera ir al lavabo o salir a la calle. Dos de sus cuidadores se quejan de que la valoración no haya reconocido un grado de autonomía más alto: «No lo entendemos. Le hace falta ayuda para todo, y hay que estar pendiente prácticamente todo el día. No comprendemos por qué la valoración es tan a la baja». Es una queja recurrente y común en aquellas familias que han solicitado la ayuda de la dependencia.

talunya 335 personas a la espera de valoración, una estadística más pequeña que en los años anteriores. En 2011 la cifra fue de 1.000 y en 2010 se habían alcanzado los 1.200 fallecimientos. También se registró la muerte de 2.350 dependientes, con la valoración aprobada, pero fallecidos antes de que se beneficiaran de algún tipo de ayuda. En 2011 el número fue de 4.500 y en 2010 de 4.200.

El Departament d'Afers Socials ha lamentado en más de una ocasión la falta de recursos que se han dedicado a la ley desde el inicio. La exconsellera Dolors Bassa recordó que la ley establece el pago conjunto al 50% entre la administración estatal y la catalana. Defensa en su momento que la Generalitat estaba aportando el 82% del dinero para las ayudas y el Estado sólo el 18%.

Los solicitantes se disparan un 41% en cinco años

En 11 años de la ley nunca hubo tantos beneficiarios en la provincia -20.164- pero también hay récord de demandantes, que son 71.690



RAÚL COSANO
TARRAGONA

Desde 2007, año en que se empezó a implementar la llamada Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, nunca se había alcanzado un número tan elevado de beneficiarios en la provincia: un total de 20.164.

A su vez, en el primer trimestre de 2018 también se ha alcanzado el récord de los solicitantes, que llegan a ser 71.690 según las últimas cifras de la Generalitat. Nunca como hasta ahora tantas personas habían solicitado acceder a una de estas prestaciones públicas. Sólo durante el año pasado 1.379 personas se añadieron a ese grupo de perceptores de la ayuda.

El número de solicitudes iniciales se ha disparado un 41% en la provincia en los últimos cinco años. Esa dinámica, junto con el aumento de beneficiarios, da fe de una inercia demográfica evidente: el envejecimiento pro-

El envejecimiento de la población hace que la aplicación de la ley sea todo un desafío

gresivo de la población y la mayor esperanza de vida, que convierte el desarrollo de la norma en todo un desafío de futuro para las administraciones implicadas en la financiación.

A ello se añade el hecho de que la ley haya dejado atrás los

años de estancamiento para avanzar, aunque sea tímidamente y a pesar de que le quede mucho camino por completar.

En 2015, el número de tarraconenses que recibían la prestación logró su mínimo: 16.832 personas. A partir de ahí, las ayudas se han ido recuperando, hasta alcanzar los registros actuales. El perfil mayoritario es bien definido: se trata de mujeres de más de 80 años, con un grado II de dependencia, catalogada como severa.

Por comarcas, la mayor parte de los receptores de estas ayudas están en el Tarragonès, con casi 4.700 personas, por delante del Baix Camp (4.258). Más reducida es la cantidad de ciudadanos que disfrutan de estas prestaciones en las Terres de l'Ebre, donde la población es menor.